

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

DECRETO mediante el cual se declaran reformados los artículos 16, 20 fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a
sus habitantes sabed:

Que la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el
siguiente

DECRETO

**"LA COMISION PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA UNION, EN USO DE LA
FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO
135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA
APROBACION DE LAS CAMARAS DE
DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO LA MAYORIA
DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS,
DECLARA REFORMADOS LOS ARTICULOS 16,
20 FRACCION I Y PENULTIMO PARRAFO, 21,
22 Y 73 FRACCION XXI DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.**

ARTICULO UNICO.- Se adicionan dos
párrafos al artículo 16, como noveno y décimo,
hecho lo cual, los párrafos subsecuentes se
recorren en su orden; se reforma el artículo 20,
fracción I y penúltimo párrafo; se reforma el
artículo 21, párrafo primero; se reforma el artículo
22, párrafo segundo; se reforma el artículo 73,
fracción XXI y se le adiciona un segundo párrafo;
todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16.

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

Las comunicaciones privadas son inviolables.
La Ley sancionará penalmente cualquier acto que
atente contra la libertad y privacidad de las mismas.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a
petición de la autoridad federal que faculte la ley o
del titular del Ministerio Público de la entidad
federativa correspondiente, podrá autorizar la
intervención de cualquier comunicación privada.
Para ello, la autoridad competente, por escrito,
deberá fundar y motivar las causas legales de la
solicitud, expresando además, el tipo de
intervención, los sujetos de la misma y su
duración. La autoridad judicial federal no podrá
otorgar estas autorizaciones cuando se trate de
materias de carácter electoral, fiscal, mercantil,
civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las
comunicaciones del detenido con su defensor.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a
los requisitos y límites previstos en las leyes. Los
resultados de las intervenciones que no cumplan
con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

.....
.....
.....

Artículo 20.

I. Inmediatamente que lo solicite, el juez
deberá otorgarle la libertad provisional bajo
caución, siempre y cuando no se trate de delitos
en que, por su gravedad, la ley expresamente
prohíba conceder este beneficio. En caso de
delitos no graves, a solicitud del Ministerio
Público, el juez podrá negar la libertad provisional,
cuando el inculcado haya sido condenado con
anterioridad, por algún delito calificado como
grave por la ley o, cuando el Ministerio Público
aporte elementos al juez para establecer que la
libertad del inculcado representa, por su conducta
precedente o por las circunstancias y
características del delito cometido, un riesgo para
el ofendido o para la sociedad.

El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculcado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculcado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculcado.

La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional;

II a X.

Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna.

Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Artículo 22.

No se considerará confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial, de los bienes, en caso del enriquecimiento ilícito, en los términos del artículo 109; ni el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado, por delitos de los previstos como de delincuencia organizada, o el de aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.

Artículo 73.

I a XX.

XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse.

Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales;

XXII a XXX.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION.- México, D.F., a 26 de junio de 1996.- Sen. **Fernando Ortiz Arana**, Presidente.- Dip. **Martina Montenegro Espinoza**, Secretaria.- Sen. **Francisco Xavier Salazar Saenz**, Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de julio de mil novecientos noventa y seis.- **Ernesto Zedillo Ponce de León**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Emilio Chuayffet Chemor**.- Rúbrica.